(S-3232/18)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

ARTICULO 1º: Declárase la emergencia pública en materia ocupacional por el término de ciento ochenta (180) días en todo el territorio nacional para todos los trabajadores del Estado Nacional, Sector Público Nacional, entes descentralizados, empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y cualquier otra forma asociativa donde el Estado Nacional posea capacidad de decisión mayoritaria.

Este plazo se prorroga automáticamente por el término de ciento ochenta (180) días, en caso de subsistir las condiciones de hecho que provocaron la emergencia.

ARTICULO 2º: Quedan prohibidos por el término de ciento ochenta (180) días los despidos o suspensiones sin justa causa para todos los trabajadores del Estado Nacional. Esta prohibición se aplica a todos los trabajadores, sin importar la modalidad contractual, ya sean bajo la modalidad de empleo público, contrato de trabajo, locaciones de servicios o contratos con terceros con plazo determinado o indeterminado.

ARTICULO 3º: Se retrotrae la planta de trabajadores del Estado Nacional al día 1º de mayo de 2018, debiéndose reincorporar a todos los despidos sin justa causa a sus puestos de trabajo, cualquiera sea la modalidad contractual que revistieran a esa fecha.

ARTICULO 4º: En caso de producirse despidos en contravención a lo dispuesto, los trabajadores afectados pueden optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios caídos hasta su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción del vínculo.

ARTICULO 5º: La acción de reincorporación y cobro de salarios caídos tramita por el procedimiento sumarísimo previsto por los Códigos de Procedimientos. Se podrá plantear cautelarmente la reincorporación preventiva hasta que recaiga sentencia firme.

ARTICULO 6º: La convalidación de la extinción da derecho al trabajador a recibir el doble de las indemnizaciones emergentes del despido sin causa que le correspondiere.

ARTICULO 7º: Se establece la continuidad automática de todas las contrataciones de personal por plazo determinado, efectuadas en todo el Estado Nacional cuyo vencimiento opere en los ciento ochenta (180) días posteriores a la entrada en vigencia de esta ley, las que mantienen su vigencia hasta el cumplimiento del plazo.

ARTICULO 8º: La presente ley es de Orden Público.

ARTICULO 9º: Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley en cuanto al ámbito local de empleo público.

ARTICULO 10: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María de los Ángeles Sacnun.- Fernando E. Solanas.- María M. Odarda.- Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.- María I. Pilatti Vergara.- Nancy S. González.- Anabel Fernández Sagasti.- Ana M. Ianni. -

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

Motiva el presente proyecto de ley el estado de alerta por despidos en la que se encuentran los distintos sectores de la Administración Pública Nacional Centralizada y Descentralizada en el último mes, en el contexto de un nuevo ajuste que achicará severamente el Estado Nacional y reducirá a once los Ministerios.

Esta política de disminución a su mínima expresión del rol del Estado tiene la particularidad de dejar a un total de 10.000 familias en una angustiante situación de desempleo e inseguridad de poder garantizarse los medios de vida suficientes.

Astilleros Río Santiago, Tandano, Ministerios cerrados, pasando por la Secretaría de Agricultura Familiar, Fabricaciones Militares, INTI, INTA, Conicet, INCAA, SENASA, Educación, etc. son ejemplos de reparticiones estatales, donde sus recursos humanos fueron injustamente dejados sin trabajo por disposición del FMI y la única necesidad de reducir el déficit fiscal.

En el caso de Astilleros Río Santiago son más de 3000 trabajadores con capacidad productiva y que se ven frente a una amenaza mediática de constante desprestigio y vulneración de su capacidad productiva. Esto ha llevado a que sean recibidos los sectores en el marco de un Plenario de la Comisión de Industria y Comercio y de Infraestructura, Vivienda y Transporte durante el mes de septiembre de 2018.

La situación de la Secretaria de Agricultura Familiar se manifestó con despidos en todo el país; los cuales coinciden con el vaciamiento del área, con la quita del Monotributo Social, con la desprotección de todos los agricultores familiares, las comunidades originarias y los campesinos.

Fabricaciones Militares es otro caso testigo donde los despidos y cierre de la producción se han hecho públicos y se ha enmarcado en una reducción del 20% instrumentada desde el Ministerio de Defensa.

Desde nuestra concepción del Estado, no podemos entender cómo pueden los gobernantes del Poder Ejecutivo, impulsados por sus ideas neoliberales y mandatos internacionales proceder al desguace del Estado Nacional, a través de medidas inconstitucionales, injustas y ostensiblemente arbitrarias.

El rol del Estado en sectores estratégicos de la industria nacional, la producción, el desarrollo, la educación, la tecnología, la cultura y demás ámbitos es de vital importancia, así como también lo son los empleados y funcionarios que día a día trabajan para hacer un país un poco mejor.

Negar la participación del Estado en la vida social y económica productiva ya nos ha dado como país resultados ampliamente desfavorables y de la mano de este modelo de ajuste nos hemos caído en una de las mayores crisis sociales, económicas y laborales que nuestro país recuerda desde el 2001.

Por lo expuesto, y porque debemos aprender de nuestros errores y aciertos es que no podemos permitir como Congreso de la Nación que no se vele por la protección del empleo, tal como lo garantiza nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es parte.

El recordado art. 14 bis dispone, las siguientes regulaciones: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes... protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público...” Siguiendo este mandato desde este Senado de la Nación nos vemos en la obligación de declarar la emergencia en materia ocupacional para el empleado público, en cualquiera de sus modalidades, a los fines de garantizar la continuidad del Estado y el empleo de alrededor de 10.000 argentinos.

Tengamos presente que el 18 de mayo de 2016 este mismo Congreso de la Nación dio sanción a la ley 27.251, la cual en términos similares a la presente declaraba la emergencia pública en materia ocupacional en todo el territorio nacional.

Pero el Presidente Macri hizo uso del veto y a través del decreto 701/2016 observó en su totalidad la ley mencionada. Entre las razones esgrimidas se menciona la supuesta “nueva situación de la República en lo que hace a sus relaciones con el mundo, su reinserción en el sistema financiero internacional y la normalización de las variables de su economía.” “Que el pesimismo y la desconfianza que fundamentan el proyecto en análisis se basa en la idea de que en nuestro país no se puede generar trabajo” y continua argumentando sobre la hipotética lluvia de inversiones y el crecimiento exponencial de la nación, el cual nunca se convirtió en una realidad tangible.

Hoy, a más de dos años de esta ley que hubiera de alguna manera matizado la situación laboral de miles de argentinos, podemos asegurar que nuestro pesimismo no era más que un análisis real de la macroeconomía y que la crisis laboral en el sector público era y es inevitable.

El congelamiento del ingreso al Estado, el despido de más de 35 mil empleados públicos desde que comenzó la Presidencia de Mauricio Macri y estas políticas de endeudamiento, inflación y apertura indiscriminada de las importaciones, así como una concentración inquietante de la riqueza, y una brutal caída del consumo, nos llevan a declarar la emergencia ocupacional para todos aquellos trabajadores del Estado que quedaron sin su fuente de ingreso.

No podemos dejar de soslayar que hemos acompañado proyectos sectoriales como el de Tandanor SACI y N, de autoría del Senador Fernando “Pino” Solanas y esperamos pronto tratamiento en la HCDN para su discusión en el Senado del Proyecto de Ley de la Diputada Gabriela Estevez, sobre Fabricaciones Militares, entre otros.

Pero en la situación de emergencia generalizada que nos encontramos, y después de reuniones con los sectores involucrados, consideramos de vital importancia avanzar con un proyecto integral y retroactivo al 1° de mayo de 2018, comprendiendo a todos los empleados del Estado.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.

María de los Ángeles Sacnun.- Fernando E. Solanas.- María M. Odarda.- Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.-